



Limpieza étnica en Sheikh Jarrah y bombardeos israelíes sobre Gaza

Mohammed El Kurd es un poeta palestino de 22 años. Su historia vital es la de la ocupación en tiempo real. La mitad de su casa, situada en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este, fue ocupada en 2009 por colonos judíos. Él tenía entonces 11 años. Desde entonces ha crecido con esos hombres a su lado, que buscan expulsarlo a él, a su familia y a 27 familias más en Sheikh Jarrah. Lo mismo sucede en el área de Silwan con 84 familias que afrontan demandas de desalojo presentadas por colonos que reclaman su propiedad. A veces, cuando Mohammed regresaba de la escuela, los colonos coreaban consignas como *"pronto estaréis durmiendo en un basurero en Ramala"* o *"a sangre y a fuego expulsaremos a los árabes"*. Su abuela, Rifqa, – que murió en 2020 con 103 años – resistió durante años los intentos de desalojo y se convirtió en un icono en el barrio.

A principios de mayo se encontraba previsto que el Tribunal Supremo israelí se pronunciara de una vez por todas sobre los derechos de vivienda de las familias de Sheikh Jarrah. Durante estos días se celebraron algunas protestas – mayoritariamente pacíficas – pro-palestinas, las cuales provocaron que el Supremo suspendiera la publicación de su sentencia. A las habituales protestas en los territorios ocupados se han sumado las manifestaciones palestinas dentro de las fronteras de Israel, algo poco comunes. Estas movilizaciones no están organizadas por partidos políticos, sino por jóvenes activistas palestinos, comités vecinales y colectivos de base. Buscan evidenciar que no nos encontramos ante un conflicto inmobiliario entre particulares y que la palabra “desahucio” no ilustra adecuadamente lo que puede suceder. *“Esto es un desplazamiento étnico forzado”*, explicó El Kurd ante distintos medios de comunicación.

El cambio climático no espera a las leyes

España ya tiene su primera Ley de Cambio Climático. Una gran ley... si hubiera sido aprobada en 1995. Hoy llega tarde y sus objetivos son claramente insuficientes. Una ley que se fija objetivos por debajo del Acuerdo de París firmado hace 5 años. Mientras, los Fondos de Recuperación Europeos vienen para que todo siga igual, con un barniz moderno, digital y "sostenible". La Emergencia Climática no espera y necesita de nuestra acción ya.

>> Pág.4

Entrevista con el Grupo Libertario Vía Libre, desde Bogotá

Desde hace más de un mes, a raíz de la reforma tributaria del gobierno del derechista Iván Duque, el pueblo colombiano se mantiene en las calles en un pulso contra el Estado. Las compañeras de Vía Libre nos cuentan desde Bogotá los motivos de su lucha.

>>Pág.6

Morir trabajando es asesinato. La muerte de Xavi en una fábrica en Cornellà • • • • • 5

La larga sombra del racismo en los EEUU. Centenario de la masacre racial en Tulsa, Oklahoma • • • • • 8

"Utopía no es una isla". Entrevista a Layla Martínez 10

Fraguas Revive. La okupación rural vence, provisionalmente, su primera batalla al derribo del pueblo • • • • • 12

La limpieza étnica palestina y el cinturón judío

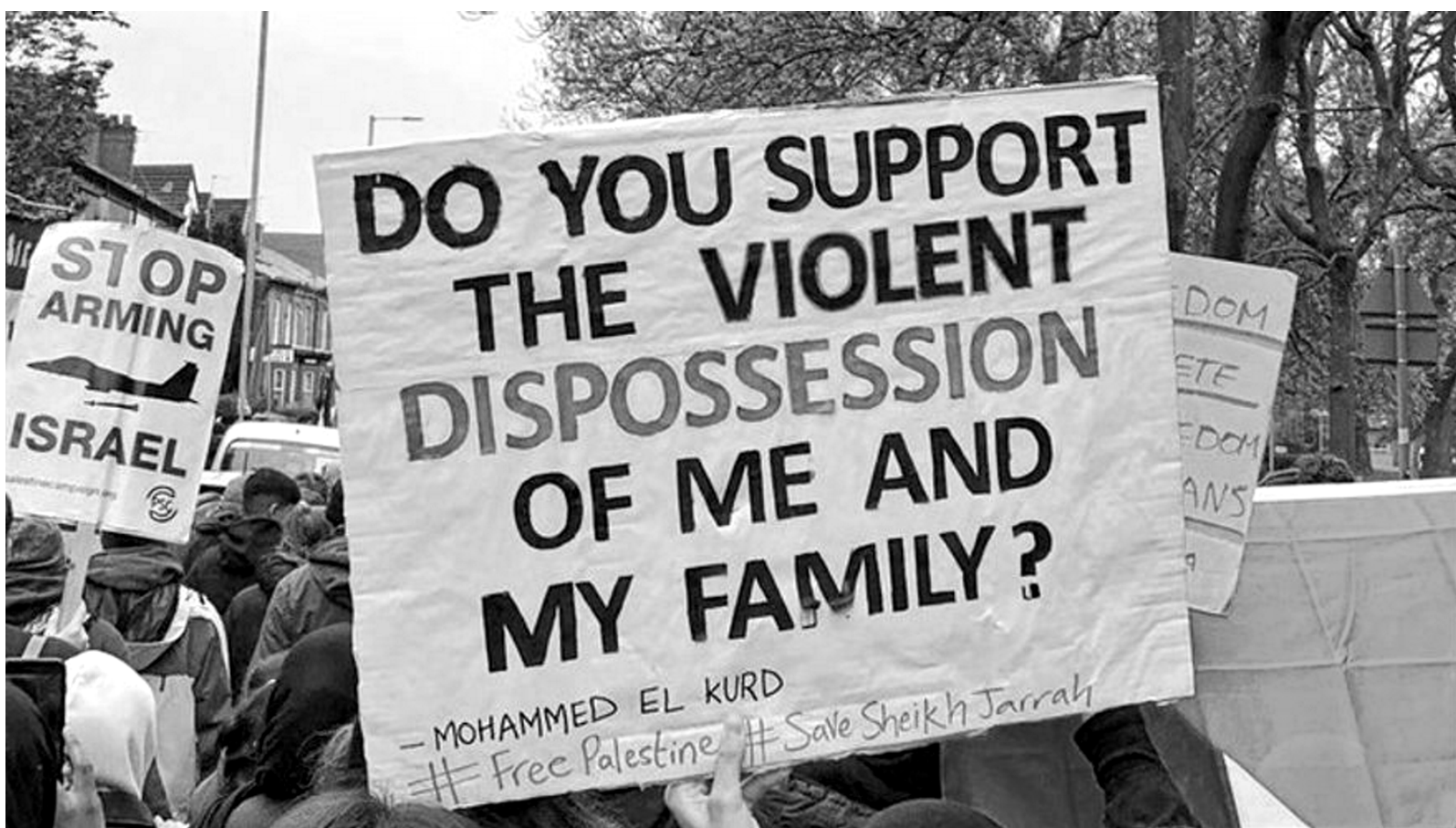
Yonatan Yosef, portavoz de los colonos israelíes en Sheikh Jarrah, parece darle la razón a El Kurd: *“Tomamos casa tras casa, toda esta zona será un barrio judío. No hemos terminado el trabajo, después iremos al siguiente barrio, y tras ello iremos a otro. Nuestro sueño es que todo Jerusalén Este sea como el Oeste, la capital judía de Israel”*, explicaba en una entrevista con varios medios. Otro colono añade lo siguiente: *“Lo veo como la continuación del proyecto sionista. El regreso a Sión. ¿A costa de los árabes?”*

nos (un episodio conocido como la Nakba²). En 1957, gracias a la intervención de Jordania, miles de familias palestinas fueron reubicadas en el barrio de Sheikh Jarrah. Cuando en 1967 Jerusalén Este fue ocupada ilegalmente por Israel, el Gobierno de Tel Aviv aprobó la Ley de Asuntos Legales y Administrativos, que determina que los terrenos de Jerusalén Este que hubieran pertenecido a judíos (y solo a judíos) antes de 1948 serían devueltos a sus dueños si los reclamaban. Los palestinos, por su parte, serían trasladados forzosa-mente, vetados de entrar siquiera en el Estado de Israel y de visitar las tierras de sus ancestros y desposeídos de

En una visita a Jerusalén Este en 2002 el entonces ministro de Turismo Bin-yamin Elon señaló que el plan estratégico para la ciudad era asegurar *“un cinturón de continuidad judía de este a oeste”*.

En 2021, este cinturón judío se va expandiendo y los territorios palestinos se van reduciendo y se encuentran cada vez más desconectados, lo cual imposibilita la creación de un Estado propio: Cisjordania se encuentra físicamente separada de Jerusalén Este por el muro (el cual, en palabras del historiador Ilan Pappé, convierte a Cisjordania en *“la cárcel más grande de la Tierra”*³) y Gaza se compone de municipios divididos

ve y calmado y un buen dominio del inglés, Mohammed El Kurd se convirtió en el símbolo de la resistencia palestina de Jerusalén Este, durante una entrevista en la CNN. La *“periodista”* le preguntó *“¿Apoya usted las protestas violentas surgidas en solidaridad con usted y con familias como la suya?”* a lo cual le respondió El Kurd *“¿Apoya usted mi desposesión violenta y la de mi familia?”*. Tras unos segundos de incómodo silencio la entrevistadora repitió *“Simplemente quiero saber si usted apoya las protestas que han estallado apoyándole a usted y a su familia”*. El Kurd respondió *“Apoyo movilizaciones populares contra la limpieza étnica, sí”*.



*Sí. Pero nuestras instituciones también fueron construidas a costa de los árabes que vivían aquí. Y el propio Estado israelí”*¹.

El origen del conflicto se remonta a 1948, cuando se fundó el Estado de Israel y se desplazó forzosamente a más de 700.000 palesti-

sus tierras, acciones contempladas como un crimen de guerra por el Estatuto de Roma. B’Tselem, la principal organización israelí de derechos humanos, señaló en 2019 que la Justicia israelí ha revocado la residencia de más de 14.500 palestinos de Jerusalén Este.

por controles militares imposibles de sortear.

Y es en este contexto en el que comenzaron, a principios de mayo, las protestas contra los desplazamientos forzosos en Jerusalén Este que previsiblemente autorizará el Supremo.

Con un tono de voz sua-

Estados Unidos y la comunidad internacional

La frase *“¿Apoya usted mi desposesión violenta y la de mi familia?”* recorrió el mundo. Resume a la perfección la situación que estamos viviendo: una limpieza étnica, en vivo y en directo, ante los ojos de la comunidad

¹ El vídeo lo podéis ver en www.todoporbacer.org/sheikh-jarrah

² Véase en www.todoporbacer.org/70-anos-de-limpieza-etnica-en-palestina

³ Véase en www.todoporbacer.org/ensayo-la-carcel-mas-grande-la-tierra

internacional, que permanece impasible.

Naciones Unidas sostiene, al menos oficialmente, que todos los territorios ocupados por Israel desde 1967 son ilegales e insta a su retirada de todos ellos. Pero su inacción y el apoyo expreso de Estados Unidos ha supuesto que Israel ha podido operar con impunidad e, incluso, proclamar Jerusalén como la capital indivisible de Israel y el pueblo judío.

Se trata del caso de colonialismo más reciente de nuestra historia, produciéndose ante nuestras narices y ante la indiferencia del mundo entero.

“Muerte a los árabes” en Al-Aqsa

En este contexto de tensiones y protestas en Jerusalén Este, y en pleno Ramadán, la policía israelí tomó la zona de Haram al-Sharif, o el Noble Santuario, el tercer lugar más sagrado del mundo para los musulmanes porque es donde se encuentra la mezquita de Al-Aqsa. Esta misma zona, conocida como el Monte del Templo, es de gran importancia también para la fe judía, pues es el lugar donde se encontraba el templo del rey Salomón, destruido por los babilonios y desde hace años diferentes grupos extremistas judíos disputan la administración de este lugar sagrado.

El 10 de mayo, jornada en que se celebra el Día de Israel, se produjeron enfrentamientos en Haram al-Sharif, después de que un grupo extremista de supremacía judía organizara una marcha en la que los participantes corearon “Muerte a los árabes” y algunos palestinos atacaran a judíos ortodoxos. Los incidentes finalizaron con cargas y disparos de la policía,

que incluso se adentraron en la mezquita y agredieron a fieles que rezaban en pleno Ramadán.

Bombardeos en Gaza

Al día siguiente de las cargas en la mezquita, Hamas⁴ lanzó algunos cohetes hacia Jerusalén Oeste. Y a esta acción y a la escalada de tensiones le siguieron bombardeos israelíes en Gaza contra, supuestamente, objetivos de Hamas. Evidentemente, los dos bandos en conflicto no son simétricos y la sofisticación y letalidad de las bombas israelíes es notablemente superior a la de Hamas. No en vano, Estados Unidos le brinda un apoyo armamentístico a Israel de 3.800 millones de dólares anuales.

Estos enfrentamientos se han saldado con más 254 palestinos muertos (más de 60 de ellos niños), más de 1.700 heridos y la destrucción de numerosos edificios en Gaza (incluyendo

Estos enfrentamientos se han saldado con más 254 palestinos muertos (más de 60 de ellos niños), más de 1.700 heridos y la destrucción de numerosos edificios en Gaza.

oficinas de prensa). En el otro lado de la balanza, en el israelí, han muerto 12 personas, entre ellas una mujer india y dos hombres tailandeses.

El hecho de que, pese a contar con unas armas inteligentes, hayan muerto tantos civiles en Gaza, nos muestra, una vez más, que al Estado de Israel no le importan las vidas palestinas.

Según datos de Naciones

⁴ Hamas es una organización islámica creada en 1987, 39 años después de la ocupación israelí. Es el chivo expiatorio de Israel para justificar cualquier acto de violencia contra el pueblo palestino (incluidas ocupaciones pasadas), pese a que Hamas lanzó su primer cohete contra Israel en 2001, 53 años después de la ocupación.

Unidas, desde 2008 hasta 2020 han muerto 5.590 palestinos por ataques israelíes y se han producido 115.000 heridos. En el mismo periodo hubo 251 muertos israelíes por ataques palestinos y 5.600 heridos.

Estados Unidos y Marruecos: aliados de Israel

En las últimas semanas hemos acudido a manifestaciones en apoyo a Palestina en ciudades occidentales y hemos visto actos de solidaridad preciosos, como el hecho de que los estibadores del puerto de Livorno impidieran salir a un barco que iba cargado de armas con destino a Israel.

Pero también hemos presenciado declaraciones miserables de la derecha y ultraderecha europea expresando su apoyo claro e incondicional a Israel.

En cuanto a las posturas oficiales de los Estados, cabe destacar que duran-

palestino y saharauí se han visto abandonados una vez más y hermanados por la desgracia.

A mediados de mayo el régimen marroquí abrió sus fronteras en Ceuta coincidiendo con la ofensiva israelí después de que se descubriera que el Gobierno español ha dado asistencia médica al líder del Frente Polisario, Brahim Gali. Marruecos chantajea a España y Europa por la causa saharauí con el objetivo de presionar también a Biden, a cambio de su mediación en Palestina y de su posición en África. La dictadura alauí se ofrece para ser enclave para las tropas de Estados Unidos y aliado frente a la influencia china en el continente.

Por supuesto, Rabat también quiere mandar un mensaje a Madrid y Bruselas de que puede crearles un problema migratorio cuando quiera. Los países europeos están pagando a Marruecos, como hacen con Turquía o Libia, para que sean nuestra brutal policía fronteriza. El 18 de mayo el gobierno español aprobó el pago de 30 millones de euros a Marruecos con esta finalidad mientras

que la Audiencia Nacional española reactivaba una causa por genocidio contra Brahim Gali tras una querrela interpuesta por un hombre de confianza del rey de Marruecos.

Las potencias occidentales, con tal de mantener su hegemonía y poder en zonas remotas de África y Asia, se han puesto al servicio de quienes violan sistemáticamente los derechos humanos. Y quienes sufren las consecuencias son los más débiles.

Este artículo ha sido escrito con informaciones publicadas por Olga Rodríguez en distintas entradas publicadas en *eldiario.es*

⁵ Véase en www.todoporhacer.org/palestina-sahara-biden

El cambio climático no espera a las leyes

Han pasado 49 años desde que el MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets, una de las instituciones técnicas de mayor prestigio mundial) a petición del Club de Roma señalara la existencia de unos límites físicos al crecimiento continuo. Crecimiento entendido como aumento del PIB, del consumo de recursos y de bienes. Y ya son 24 años desde la aprobación del protocolo de Kioto, primer gran acuerdo internacional para la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Después de todo este tiempo, por fin, en España hay una Ley de Cambio Climático (LCC). Pero como no podía ser de otra forma, llega tarde y mal.

Sabemos que uno de los grandes retos inmediatos de la humanidad es la crisis ecológica, que es la suma de diversos indicadores que nos muestran un futuro incierto. El Cambio Climático es una parte de esta crisis, y quizás la que más atención mediática esté teniendo. Y es normal, si bien apreciar la crisis derivada de la pérdida de biodiversidad nos es más complicado de percibir en nuestro día a día, el Cambio Climático es algo que ya llegó para quedarse. Veranos más largos e intensos, aumento de fenómenos climatológicos extremos o el deshielo de los grandes glaciares son hechos que hoy percibimos sin ningún tipo de duda. Frente a esta situación ninguna ley es suficiente, puesto que ninguna ley es capaz de frenar la inercia de 200 años de capitalismo industrial. Pero habrá leyes, acuerdos y normas mejores o peores. En el caso de la nueva Ley de Cambio Climático el mayor problema es que sería una gran ley de haber sido escrita en 1995.

¿Qué dice la Ley?

El Acuerdo de París de 2016 establece, en base a criterios científicos, una reducción de los GEI del 7'6% anual. Este ritmo llevaría a España a una reducción del 55% (respecto de las emisiones de 1990, que es el año de referencia) para 2030. Pues la nueva LCC fija una reducción del 23% para ese mismo año. Este sería el dato más negativo e importante, puesto que de ese objetivo de reducción derivarán todas las acciones posteriores.

El otro aspecto negativo es la poca concreción y el dejar muchos asuntos en manos de Autonomías o Ayuntamientos, lo que deja en el aire elementos que deberían ser vinculantes y explícitos.

Pero como no podía ser de otra forma, la ley también incluye aspectos que van a ser positivos. Se pone fin a las concesiones para la explotación de nuevos yacimientos de hidrocarburos, acabando con el fracking. No habrá minas de uranio a cielo abierto, como la que se estaba proyectando en Salamanca. Se refuerzan los recursos destinados a la rehabilitación energética de edificios. Se incluirá en el currículum académico la educación ambiental de forma transversal.

En cuanto a producción energética, se espera para 2023 un 42% de consumo de origen renovable, hoy es el 20%, hasta llegar al 100% en 2050. El despliegue de las energías renovables tendrá que atender a criterios de ordenación territorial y conservación del patrimonio cultural, esto viene después de varios conflictos abiertos en zonas más rurales donde la instalación de molinos eólicos entra en conflicto con las formas de vida locales o la destrucción de parajes naturales.

Respecto a la movilidad y el automóvil, los municipios de más de 50.000 habitantes deberán tener zonas de bajas emisiones, al estilo de Madrid Central. A partir de 2040 no se venderán turismos que emitan CO2.

Las grandes empresas tendrán que elaborar anualmente informes sobre los riesgos medioambientales derivados de su actividad y la transición hacia una economía sostenible.

Como vemos, la ley no supone un gran cambio de paradigma. En realidad, los deseos húmedos de las élites son continuar como si todo siguiera igual pero cambiando el motor de combustión por uno eléctrico. No hay un freno al crecimiento ilimitado. No hay una expropiación o regulación a fondo del oligopolio eléctrico. Es una ley que se ajusta al modelo capitalista de producción y que de ninguna manera carga contra los fundamentos de la crisis climática.

Fondos Europeos, "bussines as usual"

A la par que se aprueba la LCC, se produce todo el debate entorno a los Fondos Europeos para la Recuperación, conocidos como Next Generation. No son hechos aislados y debemos entenderlos como un auténtico plan estratégico de las élites a décadas vista. Estos fondos surgen

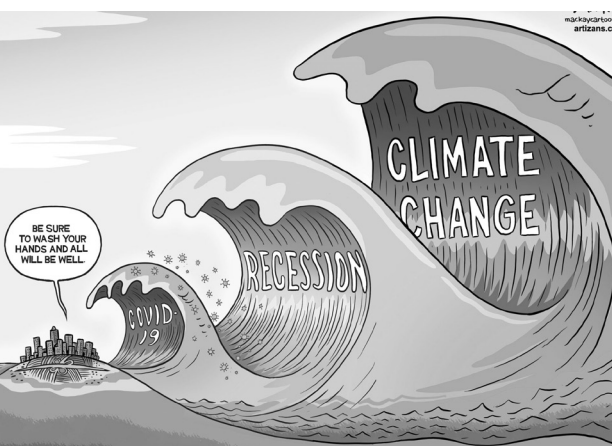
por la crisis de la Covid19, una especie de Plan Marshall tras la destrucción producida por la segunda guerra mundial, que pretenden realizar una transformación de la economía tomando como base la digitalización y la sostenibilidad ambiental.

Lo que en un principio parecían unos fondos solidarios en los que los distintos Estados de la Unión Europea se juntaban para reactivar la actividad y dotar de medios para salir de la crisis, vuelve a ser el enésimo mecanismo de generación de deuda y transferencia de fondos públicos a entidades privadas que se encargarán de gestionar auténticas millonadas que determinarán nuestra economía para las siguientes décadas.

Negacionismo de nuevo tipo

Si bien ya son una diminuta minoría quienes niegan el Cambio Climático y hablan del "camelo climático", el mayor peligro frente a la emergencia climática son quienes promueven una esperanza en que la digitalización y las nuevas tecnologías nos permitirán hacer frente a la crisis ecológica. Esta forma de plantear soluciones es un nuevo negacionismo que se viste de defensor del planeta, pero que trata de reutilizar viejas fórmulas cuyo fracaso está ya anticipado. Esperar a que un nuevo descubrimiento tecnológico en la próxima década nos va a salvar de 200 años de destrucción salvaje de nuestro planeta no parece muy sensato. Más aun cuando todos los indicadores científicos hablan de que el origen de este desastre reside en nuestro consumo voraz de recursos naturales. Mientras se invierten ingentes cantidades de dinero en tecnologías completamente innecesarias, la destrucción del planeta continúa y nuestras formas de vida se ven cada vez más deterioradas.

No existe una solución mágica a este problema. Pero desde luego sí que existen marcos de pensamiento y acción más capaces de hacerle frente. Continuar como si nada pasara, invertir en acelerar la destrucción medioambiental, automatizar procesos que requieren de combustibles fósiles o dejar la gestión política en manos de las grandes empresas contaminantes no parece un marco ganador para la humanidad. Reducir el consumo energético, relocalizar la producción, producir lo necesario, invertir en eficiencia energética o hacer un uso de la tecnología adecuado a nuestras necesidades básicas parece bastante más sensato. Una pena que a nadie de los que están al mando les interese.



Morir trabajando es asesinato

La muerte de Xavi en una fábrica de Cornellà

Podría haber sido una muerte más, una gota en un mar de estadísticas, pero su familia decidió lo contrario. Francisco Camilo, el tío de Xavi, contaba su historia en un hilo de Twitter a principios de mayo. Xavi, de 19 años, se había mudado a casa de sus tíos a finales de 2020 para trabajar en una fábrica de la empresa CIDAC en Cornellà de Llobregat. El chico estaba contento de ganar un sueldo con el que ayudar a su madre y a su hermano, a pesar de las jornadas de 12h, a pesar de que la empresa no proporcionaba ningún tipo de EPI ni les formaba en prevención de riesgos laborales, a pesar de que las máquinas eran antiguas, no tenían ningún tipo de mantenimiento y carecían de sensores de seguridad que las detuvieran en caso de accidente. A pesar de ser conscientes de todo esto, Xavi y Carlos, su primo, continuaban yendo porque “es lo que había” porque para miles de personas de clase obrera jugarse la vida cada día no es una elección libre.

El 30 de abril Xavi fue “engullido” por los rodillos de la máquina de tela asfáltica con la que trabajaba y que no se detuvo al detectarlo como debería haber hecho si hubiera tenido funcional el sistema de seguridad. “Los sistemas de seguridad no se rompen sin más, cuando un sistema de seguridad falla, la máquina no funciona, pero puentean ese sistema para que haya más producción, para que vaya más rápido y para que no haya que pararla cada vez que se atasca”, explica Joaquín Marín, secretario de comunicación de CGT Baix Llobregat.

Tras el accidente, la empresa se ha limitado a hacer un comunicado público justificando la muerte debido a un “posible error humano” y no ha querido ponerse en contacto con la familia, el único contacto ha sido con el abogado de la familia para trasladarle que “están valorando si pagan o no el entierro”. La familia ha decidido empezar una movilización para que los culpables paguen por la muerte de Xavi y que esta no caiga en el olvido. Además, deja claro que no buscan ninguna compensación económica sino que se haga justicia. El 13 de mayo unas 300 personas se concentraban a las puertas de la empresa señalándola como culpable.

En el acto intervino Ángel Figueras, extrabajador de la empresa y amigo de Xavi. “No sólo estamos aquí por la muerte de Xavi. El año pasado murieron 704 personas por accidentes de trabajo. No puede ser que una persona vaya a trabajar para mantener a su familia y un empresario lo mate. No

pedimos nada, sólo derechos, condiciones de trabajo que no sean precarias, un sueldo digno y un trabajo en condiciones que no ponga en peligro nuestra vida”.

Según denuncia CGT Baix Llobregat: “A Xavi lo mató la avaricia de empresarios que abandonaron a su suerte a los trabajadores tras dejar bien atado un gran pelotazo urbanístico”. Según podemos leer en su cuenta de Twitter, la empresa había dejado de invertir en seguridad y tecnología desde que los ayuntamientos de Cornellà y Sant Joan després, junto con la familia propietaria de la empresa y por tanto de los terrenos dónde esta se encuentra, tra-

presión por parte de los/as trabajadores/as, desemboquen en mayores accidentes.

Hay que tener en cuenta que todos estos números, ya de por sí terribles, sólo se refieren a los casos registrados y que, sobre todo en los accidentes laborales sin resultado de muerte, la cifra real es mucho mayor debido a accidentes o bajas que no se declaran por miedo a represalias o aquellos que se producen sin tener un contrato de trabajo o siendo falso/a autónomo/a (podemos incluir aquí a los/as “riders” que cuentan una alta peligrosidad y de cuya seguridad la empresa se desresponsabiliza). Según los



mitan la recalificación de estos mismos, revalorizándolos y pasando la actividad de la fábrica a tener menos interés desde un punto de vista económico.

Como la misma familia indica, el caso de Xavi es, desgraciadamente, solo uno más de las cientos de muertes que se producen en el trabajo y que debido al aumento de la precariedad lejos de reducirse siguen aumentando. Según datos del Ministerio de Trabajo, la mortalidad laboral ha aumentado de 695 en 2019 a 708 en 2020, a pesar de la sustancial reducción de actividad que ha supuesto la pandemia de la Covid-19 con miles de trabajadores/as despedidos/as o en situación de ERTE.

Los accidentes laborales mortales tienen una tendencia ascendente desde 2012, año en que se publicó la última reforma laboral, reforma que el actual gobierno prometió derogar, y que profundizó en la precarización de las condiciones de trabajo. No es de extrañar que unas peores condiciones laborales, con más estrés, jornadas más largas, menos capacidad de

datos de Trabajo solo 21 muertes por covid fueron consideradas accidentes de trabajo, a pesar de que es presumible que la cifra de contagios en el puesto de trabajo o camino del mismo fue mucho más alta (aquí debemos recordar a Marriose, conserje de instituto que murió por covid el pasado mes de marzo¹).

Por respeto a todas las familias que han perdido a familiares trabajando (la mayoría de las veces con nula cobertura mediática, sin los actos oficiales y las firmes condenas que llevan aparejadas las muertes rentables políticamente) nos parece necesario desmontar el discurso de la meritocracia empresarial, de la generación de puestos de trabajo y del arriesgar el capital, porque la realidad es que quien arriesga su vida diariamente son los/as trabajadores/as en sus puestos de trabajo. Es a lo que se reducen las relaciones laborales, unos/as perdemos la salud y la vida, otros/as se llevan beneficios.

¹ Véase www.todoporhacer.org/marijose-covid

Entrevista con el Grupo Libertario Vía Libre, desde Bogotá:

"Las críticas a la reforma fiscal pronto incluyeron otras demandas sociales históricas de diversos colectivos de Colombia."

Las primeras movilizaciones que comenzaron el pasado 28 de abril, exigían la eliminación del proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible. ¿En qué consiste dicha Ley y por qué ha podido ser el detonante de protestas masivas?

El proyecto de ley presentado por el gobierno de Iván Duque, del Centro Democrático, suponía una política de ajuste económico neoliberal en medio de la profunda crisis económica desatada por la pandemia y que supuso una disminución del PIB para 2020 en -6.8%. Este proyecto, la tercera reforma tributaria patronal presentada por la administración uribista en tres años de mandato, buscaba reducir el déficit fiscal, mediante el aumento de los impuestos sobre la población trabajadora, manteniendo el modelo general de grandes exenciones tributarias sobre las empresas y la burguesía.

El trasfondo de este programa patronal era la crisis histórica de salud pública y una crisis económica similar a la 1929, que ha aumentado la desigualdad, la pobreza que llega al 42% de la población, el desempleo que golpea al 15% y el trabajo precario que lleva al 88% de los trabajadores a ganar menos de dos salarios mínimos.

El proyecto de ley pronto contó con un amplio rechazo de la población trabajadora, y el movimiento del 28 de abril, el séptimo movimiento de paro general contra el gobierno, logró catalizar en parte por un importante trabajo de agitación, el fuerte rechazo contra el gobierno. Finalmente, por la presión de la calle el gobierno se vio en minoría en el parlamento, al ser traicionado por su propio partido, y el 4 de mayo se vio obligado a retirar el proyecto y aceptar el día 5 del mismo mes la renuncia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, uno de los hombres fuertes de la coalición uribista, conservadora y evangélica en el poder.

El origen de la protesta fue superado desde el primer momento, sumándose desde la exigencia del fin del feminicidio, la oposición de proyectos de megaminería o fracking, respeto por los pueblos indígenas o demandas es-

tudiantiles. ¿Cuáles son las exigencias que sostiene el movimiento?

Lo cierto es que la demanda inicial general de rechazo a la reforma tributaria, se articuló de forma temprana con un conjunto más abierto, diverso y desarticulado de demandas sociales como las que mencionan, además por ejemplo del proyecto de reforma neoliberal a la salud que también fue retirado el pasado 19 de mayo. Además, pronto los grandes niveles de represión policial y parapolicial desplegados contra el movimiento pusieron en el centro la reivindicación de las víctimas de violencia policial y el rechazo a la violencia estatal y paraestatal, que se ligan con demandas históricas como el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional o el fin del asesinato contra líderes y lideresas sociales.

Por otro parte se ha sumado en esta coyuntura la lucha previa de las maestras estatales contra el retorno a clases presenciales sin condiciones sanitarias, de las estudiantes universitarias por gratuidad en la matrícula, de las trabajadoras estatales por un pliego nacional estatal, de comunidades indígenas, negras y campesinas por políticas de apoyo agrario.

Una de las demandas es la dimisión del derechista Iván Duque. ¿Este rechazo al Gobierno está siendo capitalizado por la oposición de Gustavo Petro? ¿O las protestas se encuentran alejadas de partidos políticos?

Hay una gran oposición contra el gobierno Duque y desde el paro nacional del 21 de noviembre de 2019 se generalizó la consigna de fuera Duque. Sin embargo, la demanda de salida del gobierno no ha logrado instalarse lo suficiente y este es un elemento que no se contempla en las reivindicaciones más concretas por lo menos en lo inmediato.

Por un lado, se encuentran los sectores centristas de la llamada Coalición de la Esperanza, que han buscado sin éxito representar un movimiento que habían condenado y reprimido desde los gobiernos locales. Por otro lado, se halla el liderazgo socialdemócrata de

Gustavo Petro y el movimiento electoral Colombia Humana. Son populares entre muchos manifestantes, tanto entre las organizaciones sindicales y sociales, como entre la juventud popular que está haciendo su primera experiencia política. Sin embargo, aunque tienen un cierto papel mediático, no han jugado un papel relevante en la organización y el desarrollo de la protesta. El propio Petro, que ha sido llamado por senadores uribistas el "mayor anarquista del país", solo participó de una movilización tras 20 días de protesta y sus partidarios buscan una canalización electoral de esta dinámica en miras a las elecciones presidenciales de 2022.

Los partidos políticos de izquierda han jugado un papel en esta coyuntura especialmente en el marco de la actividad sindical o estudiantil, pero no han conducido un movimiento tan explosivo e inorgánico. Aunque se actúa sobre un trasfondo de muchos años de actividad y organización comunitaria, en muchas actividades locales las barras de fútbol o los grupos de amigos de los barrios, han jugado un papel más importante que las organizaciones sociales tradicionales.

Vemos imágenes y leemos relatos de barrios alzados, con gran nivel de movilización y en los que incluso se han expulsado a las fuerzas policiales. ¿Cómo se están organizando estos lugares? ¿se han creado nuevas estructuras que permitan la autoorganización barrial o ya existían con anterioridad?

Estas situaciones resultan muy interesantes, pero hasta ahora son cortas y fragmentarias. Sí existe un elemento claro de rechazo por parte de importantes sectores de jóvenes populares a la Policía, que se expresa en los ataques contra instalaciones policiales como los Comandos de Atención Inmediata (CAI), retomando elementos de la revuelta contra la brutalidad policial del 9 y el 10 de septiembre de 2020, tras el cruel asesinato de Javier Ordoñez, movimiento cuya represión se saldó con al menos 13 muertos.

El nivel de movilización varía mucho a nivel regional y local, destacándose sobre todo la situación del

departamento del Valle del Cauca en Cali o Yumbo por los llamados puntos de resistencia con bloqueos más o menos continuos de calles. También sectores de trabajadores y empresarias del transporte como camioneros o taxistas realizaron bloqueos en carreteras en la segunda semana de movilización, con sus propias reivindicaciones de corte más corporativo.

En general prima la idea de actividad espontánea y la práctica de la movilización permanente, aunque las formas de organización propia son aún débiles. Frente a la protesta de 2019 donde se desarrollaron de forma embrionaria asamblea populares locales luego disueltas, los niveles de auto organización comunitaria parecen más débiles en esta coyuntura, aunque sí se han desarrollado experiencias en ese sentido en Cali, algunos barrios populares y universidades públicas.

En sitios como en Cali, hemos podido ver a pueblos indígenas acudiendo a la ciudad para unirse a las marchas. ¿Cuáles son sus exigencias y cómo es su participación en las protestas?

Los pueblos indígenas han tenido una participación diversa en la coyuntura y han recibido en general una respuesta racista de parte de la prensa empresarial y los sectores conservadores que los retratan como incivilizados. Por un lado, sectores del pueblo misak organizados en Autoridades Indígenas del Sur Occidente (AISO) han desarrollado acciones simbólicas centradas en el debate de la memoria histórica, como el derribo de estatuas de conquistadores coloniales. Por otro lado, pueblos indígenas de la región del amazonas, el caribe y el centro del país han participado de diversas movilizaciones en las grandes capitales nacionales y liderado algunas actividades propias de protesta.

En paralelo, un sector indígena mayoritariamente nasa del departamento del Cauca organizado en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) venía desarrollando desde mediados de abril una lucha por la recuperación de tierras en manos de hacendados y empresas que llamó “Minga hacia adentro”. Desde principios de mayo la Minga hacia adentro se desdobló hacia afuera, y empezaron a realizar bloqueos de la carretera panamericana en conjunto con organizaciones campesinas y de comunidades negras, en parte por las demandas nacionales, pero también exigiendo el cumplimiento de acuerdos previos del gobierno nacional con

los sectores rurales. En este mismo periodo un grupo del CRIC se trasladó hacia Cali, como lo había hecho en la segunda mitad de 2020, para participar de la protesta y eventualmente de los bloqueos, hechos donde sufrieron una fuerte y racista represión policial y parapolicial, así como intentos de masacre.

Las fuerzas de seguridad colombianas tienen un largo historial de represión y vulneración de derechos humanos. ¿Cómo está siendo la represión del Gobierno?

La represión contra la protesta, especialmente contra los bloqueos de vías, pronto combinó los elementos “legales” de uso de la fuerza policial con los elementos irregulares e ilegales tan propios del Estado colombiano. Así por un lado tenemos la acción antidisturbios de la fuerza disponible, la policía nacional y el ESMAD, aplicada con un nivel extraordinariamente alto de sevicia, que ha sido reforzado con el llamado de ayuda militar anunciada por el gobierno nacional desde el pasado 1 de mayo y la presencia de tropas del Ejército en zonas como el Valle o el Atlántico y en diversos bloqueos de carreteras.

Por otro tenemos la presencia de agentes civiles sin identificar y los disparos, incluidas ráfagas de ametralladora, efectuados contra los manifestantes por la propia Policía en las situaciones de desborde en los barrios de Bogotá o Cali, de los que se tiene 133 casos documentados. Y además tenemos la acción de fuerzas parapoliciales y paramilitares, con disparos realizados contra manifestantes en Cali, Pereira o Medellín, efectuados desde carros o edificios.

Según registros de Indepaz para el 20 de mayo hay 47 víctimas mortales de la represión policial y parapolicial. Además, registraba Temblores e Indepaz para el 16 de mayo 30 víctimas de violencia ocular, 1.055 detenciones irregulares, al menos 362 heridos, se contabilizan en total unos 2.110 casos de violencia ejercida por la fuerza pública y la Defensoría del Pueblo registraba 548 reportes de desaparición de personas para el 9 de mayo. Además, se ha denunciado la aplicación de procedimientos ilegales para alargar las detenciones, la ocurrencia de allanamiento sobre hogares sin orden judicial, el lanzamiento de gases lacrimógenos sobre viviendas, la aplicación de tratos crueles y torturas contra los detenidos, cortes intermitentes del servicio de luz sobre áreas afectadas por la represión.

Leemos innumerables denuncias de abuso y violencia sexual contra mujeres. ¿Es una práctica común entre las fuerzas de seguridad?

Sí, lamentablemente lo es. Las Fuerzas de Seguridad del Estado, policiales y militares están compuestas por abrumadora mayoría por hombres con valores machistas, la alta jerarquía policial y militar es exclusivamente masculina, los integrantes de estos organismos viven dentro de cuerpo patriarcal violento y acosador y sus relaciones con los civiles están marcadas también por todo tipo de expresiones de dominación masculina.

En la represión policial es común la violencia de género y los actos contra las mujeres y disidencias sexuales, y son reiteradas las denuncias de abuso en las estaciones de Policía, camiones y unidades de detención. La actividad militar es incluso peor, porque se utiliza el terror sobre las mujeres como un arma más de la lucha contra insurgente, como estrategia de la guerra.

En la actual coyuntura se han registrado al menos 16 casos de violencia sexual ejercida contra manifestantes mujeres y 3 casos abiertos de violencia de género.

Desde fuera de Colombia se están produciendo manifestaciones y otras muestras de solidaridad internacional.

Las labores internacionales de difusión de información, denuncia de la represión, discusión sobre la situación nacional en diferentes ámbitos, acompañamiento simbólico y logístico a las víctimas, apoyo financiero a las campañas de compra de implementos y alimentos, presión a los medios y los políticos para que esclarezcan su posición sobre esta grave situación, así como acciones de presión sobre el Estado colombiano ante embajadas y delegaciones, son muy valiosas.

Nuestra situación es difícil, pero esfuerzos internacionalistas más amplios, continuos y sostenidos son vitales porque también es dramática la situación de las luchas populares en Myanmar, Kurdistán, Sahara Occidental o Palestina. Sin embargo, también es importante que la lucha social en Colombia alimente las diversas luchas populares locales, y lo mejor de nuestra experiencia de movilización permita fortalecer las organizaciones y movimientos sociales y populares del mundo tal como lo hicieron hace una década los indignados y el movimiento del 15 de mayo.

Puedes leer la entrevista completa y la realizada a la ULET-AIT en nuestra web

La larga sombra del racismo en los Estados Unidos Centenario de la **masacre racial** en **Tulsa, Oklahoma**

La historia oficial e impuesta en la práctica de los Estados Unidos es un cuento que idealiza el sueño americano desde el privilegio de ser blanco, rico y colonizador. Para conocer otras versiones alternativas de la historia social estadounidense recomendamos la lectura de la obra del politólogo Howard Zinn: *'A people's history of the United States'* (traducido como 'La otra historia de los Estados Unidos'). La opresión ha sido aplicada en los Estados Unidos desde que su población de ascendencia europea y blanca, decidió unilateralmente que había sido llamada de manera divina en un sentido de misión espiritual a la conquista del territorio Oeste. Una perspectiva que un par de siglos después ha sido ampliada a todo el territorio mundial donde los Estados Unidos mantienen su propósito original de conquista. Según el filósofo estadounidense Noam Chomsky esta idea sería una especie de cometido providencial encargado con gran especificidad a los Estados Unidos, una idea primigenia de extender los valores morales de manera imperialista disfrazada de universal. Y es esa idea original la que ha configurado el desarrollo político, social y económico en la práctica de la potencia más criminal extendida en el tiempo en la época contemporánea.

Una historia de segregación racial: la vida idealizada según los blancos

El racismo en los Estados Unidos se ha manifestado históricamente contra las comunidades africanas, asiáticas o indígenas americanas; siendo ejercida por emigrantes blancos de origen europeo. En el último tercio del siglo XIX comenzaron a surgir las denominadas *Leyes Jim Crow* de segregación racial, legislaciones estatales y locales que construyeron el racismo institucional estadounidense. Eran aplicadas bajo el retorcido lema 'separados pero iguales', leyes contra afroamericanos y otros grupos étnicos no blancos. Determinaban desigualdades económicas, sociales, o educativas; y la discriminación colectiva racista como política oficial de los Estados Unidos.

En el sur rural estadounidense, tras la Guerra de Secesión (1861-1865) que

abolió oficialmente la esclavitud, los afroamericanos libertos continuaban teniendo unas condiciones de vulnerabilidad en todos los niveles de su vida. Las mujeres negras continuaban siendo violadas, se seguía trabajando en situaciones de explotación, e intimidados por grupos paramilitares opositores como el Ku Kux Klan. En las ciudades del norte estadounidense se comenzaban a crear guetos donde la vida afroamericana ocurría completamente segregada de la de los ciudadanos blancos de primera categoría. Otras comunidades sociales que se fundaron en el territorio estadounidense eran denominadas *ciudades del atardecer*, ya que permitían la presencia de personas negras solo durante el día para trabajar, pero no podían residir en esa ciudad y debían marcharse antes de que anoheciera. Estas políticas continuaron aplicándose durante gran parte

el boicot de autobuses de Montgomery (Alabama) en 1955 por Rosa Parks; y la gran marcha sobre Washington en 1963, con el discurso histórico de Martin Luther King. Abolidas las legislaciones de segregación racial por considerarlas moralmente denigrantes e inaceptables, las discriminaciones sociales continuaron, de hecho surgieron organizaciones como los Panteras Negras (1966-1982), que se autodefendían de la violencia policial y de grupos supremacistas. Esa violencia de carácter racista llega hasta nuestros días, las desigualdades socioeconómicas siguen siendo cotidianas hacia las comunidades afroamericanas. Hace un año saltó internacionalmente el movimiento Black Lives Matter, tras el asesinato del afroamericano George Floyd, pero como vemos la historia racista de los Estados Unidos hunde sus raíces en la impunidad de sus crímenes contra el diferente.



del siglo XX, con especial intensidad en los años 30 coincidiendo con la Gran Depresión económica, y algunos conatos de violencia racial flagrante que no tenían mucho que envidiarle al nazismo europeo que, años después los Estados Unidos afirmaban necesario combatir en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la Alemania Nazi utilizó las leyes raciales estadounidenses como modelo para crear las Leyes de Nuremberg de 1935 contra los judíos.

Las leyes de segregación racial estadounidense se anularon oficialmente el siglo pasado, a través de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho de Voto de 1965. Esto se debió a la larga lucha de décadas de las comunidades afroamericanas y otras etnias, teniendo como puntos álgidos simbólicos

Cien años de los crímenes y la violencia racial contra afroamericanos en Tulsa

Entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 1921 tuvieron lugar unos hechos conocidos como los disturbios raciales de Tulsa, o la masacre racial de Greenwood, cuando multitudes de residentes de etnia blanca atacaron a los residentes afroamericanos, sus negocios, iglesias y escuelas en el distrito de Greenwood, en la ciudad de Tulsa, Oklahoma. El ataque fue llevado a cabo por una turba de centenares de racistas blancos de la ciudad, a quienes los propios funcionarios municipales les cedieron armas, e

incluso se lanzaron bombas incendiarias desde aviones privados, que destruyeron más de treinta y cinco calles del área donde residían y trabajaban las comunidades afroamericanas.

En esos años el territorio de Oklahoma tenía una gran tensión racial, política y social; admitido como estado de la federación en noviembre de 1907, la legislatura estatal había aprobado la ley de segregación racial. Tras la Primera Guerra Mundial, muchos militares estadounidenses habían regresado a sus hogares arrastrando todas las perturbaciones del conflicto bélico. Además, había resurgido recientemente el Ku Kux Klan, y muchas familias asentadas en este territorio habían sido históricamente esclavistas. Tulsa había sido territorio de indígenas norteamericanos, pero a finales del siglo XIX, y aprovechando el auge petrolífero, fue oficialmente fundada como ciudad por W. Tate Brady, que posteriormente se vincularía al mencionado Ku Kux Klan. La mayoría de la población afroamericana en Tulsa convivían en el distrito de Greenwood, al norte de la ciudad, disfrutando de gran prosperidad en comparación a otras comunidades negras debido al boom del petróleo.

En la tarde del día 30 de mayo, un limpiabotas afroamericano llamado Dick Rowland, de 19 años de edad, fue acusado de atacar a la joven Sarah Page, operadora del ascensor del cercano edificio Drexel, donde el joven negro estaba acostumbrado a entrar durante su jornada laboral para ir al baño en la última planta. Aunque la muchacha de 17 años tan solo declaró que se había sobresaltado al agarrarla el joven del brazo y que había gritado por el susto, Dick Rowland fue detenido al día siguiente de los hechos en la casa familiar en el distrito de Greenwood. En la edición vespertina de un periódico sensacionalista de la ciudad se publicó la noticia del incidente, y también se alertaba de que algunos ciudadanos blancos querían presentarse en la prisión donde estaba provisionalmente el joven Rowland para lincharle. Sin embargo, todos estos sucesos están salpicados de irregularidades ya que nunca se encontró por escrito la declaración de la joven ante la policía.

Al atardecer del 31 de mayo varios cientos de residentes blancos se habían congregado alrededor del Palacio de Justicia del Condado de Tulsa, donde había sido trasladado detenido el joven Rowland desde la prisión común de la ciudad ante el temor del linchamiento. El recién nombrado Sheriff del condado, Willard McCullough, tenía la intención de evitar que estallase una si-



tuación caótica en la ciudad, rechazando la entrega del joven afroamericano como reclamaba la turba supremacista en la calle. A no demasiada distancia, en el distrito de Greenwood, la tensión ante las noticias que llegaban desde el Palacio de Justicia estaba creciendo, una cincuentena de hombres afroamericanos decidieron prepararse para acudir en camionetas y armados, con objetivo de impedir el linchamiento del miembro de su comunidad. Los rumores de un levantamiento afroamericano se extendieron por la ciudad y la congregación de racistas blancos ascendía en más de mil personas, que incluso arrasaron una armería cercana al centro de la ciudad. Cuando uno de los hombres blancos le exigía a un hombre afroamericano que le entregase su pistola, se hizo un disparo que inició un intenso tiroteo de algunos segundos. La turba de supremacistas blancos persiguió al pequeño contingente de afroamericanos hasta el distrito de Greenwood, donde causaron pánico entre la población de esa zona al disparar criminalmente sobre cualquier persona negra en la calle.

Durante toda esa noche y en la mañana del 1 de junio, numerosos grupos de hombres blancos accedieron al distrito afroamericano disparando indiscriminadamente contra residencias y negocios, saqueaban a su antojo y arrojaban trapos de aceite prendidos sobre los edificios. Las agresiones se extendieron a otras partes de la ciudad, donde trabajadores afroamericanos eran detenidos o asesinados por bandas de hombres blancos por medio de una extrema violencia racial. La población de Greenwood inició un éxodo masivo, mientras tanto algunos grupos afroamericanos organizaban una autodefensa desde algunos tejados armados con rifles para propiciar que parte de la comunidad se pusiera a salvo. La turba de residentes blancos, apoyados directamente por la mafia local y la policía, llegaron a utilizar aviones privados para el tiroteo desde el aire, y lanzar bombas incendiarias. Los bomberos de la ciudad

fueron rechazados a punta de pistola por la turba de blancos racistas para evitar que sofocaran los incendios en el área de Greenwood. En la mañana del 2 de junio llegó un contingente de un centenar de hombres de la Guardia Nacional estadounidense desde la ciudad de Oklahoma, y declararon la Ley Marcial para controlar la ciudad tras haber contactado con su alcalde y autoridades locales.

Consecuencias directas de la masacre y memoria social local

Más de 800 personas fueron ingresadas en hospitales, y 6.000 afroamericanos provisionalmente fueron detenidos en grandes instalaciones de la ciudad. Inicialmente se hablaba en medios de comunicación de la época de una cifra de muertes demasiado baja, en torno a 40, sin embargo se estima que hubo cerca de 300 muertos en esta violencia racista desatada en Tulsa. Hasta el año 1998 no se decidió crear una Comisión Estatal que investigara oficialmente los hechos, que se inició finalmente en 2001 para sacar del silencio la masacre. Se hizo una investigación histórica profunda que resignificase los hechos como un suceso dentro de la larga sombra del racismo estadounidense, y los devolvieran a la historia local, donde no se había estudiado nunca en las escuelas estatales hasta el año pasado. Además, inició un procedimiento para establecer unas recompensaciones económicas a los descendientes de estas familias supervivientes, muchas de ellas, se estima que en torno a 10.000 decidieron abandonar la ciudad ante esta masacre racista. La historia del racismo estadounidense es una historia de opresión violenta, la principal amenaza de terror interna que ha exterminado a diversas comunidades humanas. Estos sucesos de Tulsa son un ejemplo en la memoria social, esa lucha que sigue costando diariamente la vida a personas afroamericanas en la actualidad estadounidense.

Entrevista a Layla Martínez: “El neoliberalismo es profundamente antiutópico, ni siquiera defiende las utopías capitalistas”

Layla Martínez (Madrid, 1987) es editora de la editorial Antipersona, colaboradora habitual de medios como El Salto y autora de numerosos libros. Ha escrito sobre la explotación de la mujer en *Gestación Subrogada: Capitalismo, Patriarcado y Poder* (Pepitas de Calabaza, 2019) y sobre el papel de la mujer en la ciencia ficción en *Infiltradas* (Palabristas, 2018).

El pasado mes de noviembre publicó su ensayo más reciente, *Utopía no es una Isla* (Episkaia), un recorrido por proyectos utópicos pasados que nos devuelvan la capacidad de imaginar y que nos guíen para construir un futuro en el que merezca la pena vivir. Sostiene que la proliferación de distopías en forma de novelas, series y películas que estamos viviendo está siendo enormemente funcional para el neoliberalismo capitalista, que utiliza esta producción cultural a su favor, para mantener el orden actual y evitar los cambios. Si solo imaginamos un futuro peor, el presente nos parecerá admisible y no lucharemos para cambiar las cosas.

Tras leer esta obra nos pusimos en contacto con ella a fin de hacerle una entrevista y tuvo la gentileza de aceptar. Lo que sigue a continuación son las preguntas que le formulamos – y las respuestas que nos dio – a finales del mes de mayo.

En el momento histórico en el que vivimos de avance de la ultraderecha en el mundo, recortes de derechos, una pandemia global y la iniciación de numerosas guerras, proliferan las distopías, sobre todo en series de televisión y en novelas. Por eso choca descubrir que has roto con esta dinámica y has escrito un libro acerca de las utopías. ¿Qué te llevó a hacerlo?

Justamente esa sensación de que todos los discursos sobre el futuro parten de la idea de que iba a ser peor que el presente. Por supuesto el hegemónico, pero también los contrahegemónicos. Cuando daba charlas y talleres sobre la historia del futuro y la evolución de la ciencia ficción durante el siglo XX una de las cosas que preguntaba a los asistentes era cómo veían su ciudad dentro de cincuenta años. Di los talleres en muchos sitios, desde asociaciones de ciencia ficción a universidades o centros sociales autogestionados y la respuesta era siempre la misma: deterioro de las condiciones laborales, pérdida de derechos, aumento de la crisis ecológica, capitalismo de megacorporaciones, tecnología mejorada pero aplicada al control social... Me respondían eso incluso militantes de la izquierda radical, que en teoría se supone que deberían creer que lo que hacen puede conducir a otra sociedad. Y pensé que ahí había algo importante. Por supuesto no he sido la única ni la primera que lo ha pensado, pero creí que merecía la pena investigarlo.

En el libro dices que las distopías reflejan nuestras an-

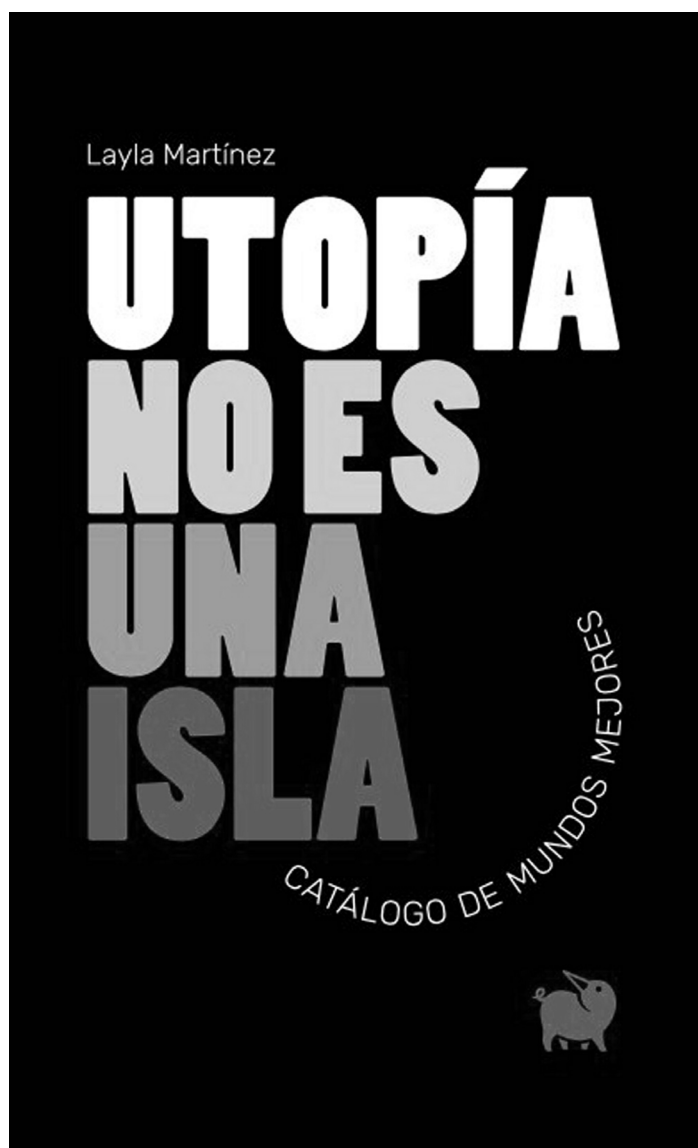
siedades y que, a diferencia de lo que sucedía anteriormente, ya no creemos que el futuro esté ligado al progreso y vaya a ser necesariamente mejor. ¿Cuándo crees que dejamos de pensar en el futuro en clave de utopía y lo empezamos a idear como una distopía? ¿Por qué sucedió esto?

Los teóricos de la posmodernidad, como Jameson, sitúan la pérdida de la idea de progreso justamente en el inicio de la posmodernidad. Es uno de los cambios clave para entender cómo se

modifica el marco cultural. Ellos lo sitúan a finales de los años setenta y principios de los años ochenta. Yo creo que en ese momento tienen lugar algunos hechos históricos clave que convergen ahí, pero sin duda uno de los que más peso tienen en la pérdida de la capacidad de imaginar un futuro mejor es el ascenso al poder del proyecto neoliberal, con su bautismo de sangre en Chile y la llegada de Thatcher y Reagan. El neoliberalismo es profundamente antiutópico, ni siquiera defiende utopías capitalistas como las del capitalismo de posguerra, con sus adosados en los suburbios y su centro comercial. No hay un proyecto colectivo ni siquiera de tipo capitalista, solo hay un presente continuo de depredación constante.

¿Consideras útil la proliferación de distopías y obras literarias que piensan en clave negativa para advertirnos de los peligros que están por llegar? ¿O es preferible pensar en términos de utopía?

Yo creo que las distopías surgen por el deseo de alertar sobre los peligros de que suceda lo que se cuentan en ellas. Cuando Margaret Atwood escribe *El cuento de la criada*, por ejemplo, lo que busca es alertar de los riesgos de un recrudecimiento del patriarcado. El problema es el efecto combinado, el hecho de que prácticamente no se haya escrito otra cosa que distopías cuando se imagina el futuro. La realidad y la ficción se relaciona de forma compleja. La segunda refleja la primera, refleja nuestras ansiedades y miedos colectivos, también las esperanzas, pero también la modifica y la altera. Se corre el riesgo de que se conviertan en profecías autocumplidas.



¿Existe un futuro para nosotras? ¿O es inevitable el colapso? Algunas pensadoras creen que las utopías de antaño pensaban que los recursos eran ilimitados y que la utopía vendría cuando nos apropiáramos de la producción y que ésta sería infinita, pero que en la actualidad quizás la utopía pueda llegar en cómo organizamos los recursos finitos para gestionar de una manera ética el colapso. ¿Crees que de la catástrofe puede nacer la oportunidad?

Yo personalmente tengo muchos problemas con la idea de colapso en sí misma. La crisis ecológica no va a provocar un colapso de un día para otro como el que aparece en las series y las películas, la sociedad no se va a derrumbar un día concreto y todo el mundo va a saquear los supermercados como en una plaga zombi. A lo que nos enfrentamos es a un deterioro continuo y progresivo, que ya estamos viviendo. Cuanto más avance ese deterioro, más problemas tiene la supervivencia en la tierra de animales humanos y no humanos, como también estamos viendo ya. Pero la buena noticia es que estamos a tiempo de evitar las peores consecuencias de ese deterioro, que estamos a tiempo de echar el freno y detener ese avance. Eso supone un esfuerzo enorme, supone derribar el capitalismo entero en un plazo de tiempo muy corto, pero también nos permite imaginar sociedades mucho más justas y una vida mucho más dignas. La idea de colapso creo que es negativa políticamente porque nos condena a gestionar ruinas y porque extiende una idea muy paralizante: “si no se puede hacer nada, si el colapso es inevitable ¿para qué voy a intentarlo?”. Creo que es mucho más útil políticamente pensar a dónde queremos ir, qué sociedad vamos a construir tras el capitalismo, porque con eso al menos es más fácil movilizarnos. El miedo paraliza, la esperanza puede movilizar.

En este ensayo recorres el pensamiento de muchas personas que idearon un mundo mejor, empezando por Tomás Moro, pasando por el pensamiento marxista, las comunas victorianas, el panafricanismo y el ecosocialismo, entre otros. No son meras ideas y obras literarias, sino que convivieron con proyectos revolucionarios históricos. ¿Por qué escogiste estos hitos en concreto?

Quería que el ensayo hiciese un repaso en el que se tocasen diferentes épocas históricas y diferentes lugares del mundo, pero la idea es que fuera

cortito, así que tenía que elegir. De los históricos intenté no dejar fuera a los más relevantes –me parecía que no tenía mucho sentido hacer una historia de la utopía sin el socialismo o la descolonización–, pero de los actuales intenté centrarme en aquellos que no eran tan conocidos o de los que solo se había conocido una faceta. Por ejemplo, no hablé de los zapatistas porque ya hay mucha información sobre ellos, en su lugar pensé en guerrillas que estuviesen actualmente activas y que además conjugaran el ecologismo y el indigenismo con el socialismo, como los naxalitas. En otros casos, intenté dar una visión diferente de lo que habitualmente se ve en los medios, como en Venezuela, centrándome en el movimiento popular y en las comunas más que en otras cuestiones.

Sin embargo, muchos de estos movimientos también tuvieron sus lados negativos. Muchas de las primeras utopías se idearon desde una visión colonial, patriarcal e incluso clasista.

Sí, la idea era más ver el impulso utópico que hay en estos movimientos, la ambición por cambiar la sociedad sin ocultar desde qué posición estaba hablando el escritor o el teórico que las creó. Creo que la Historia está para eso, para coger herramientas que sir-

ven, pero también para criticar las que ya no. Los movimientos sociales y las ideologías no deben de estar en urnas y mantenerse puros, sino ir mutando y cambiando.

Por último, describes el capitalismo como un sistema que te exige producir hasta la extenuación, sin importar cómo te sientas. De hecho, cuanto menos sientas y más aislada te encuentres, mejor. ¿Qué podemos hacer para romper con esta dinámica?

Es muy difícil romper esa dinámica, pero yo creo que la brecha para hacerlo está en el encuentro con los demás. Cuando estudié Ciencias Políticas nos decían que la política era la gestión del conflicto y a mí, ya entonces, me parecía una definición muy pobre. Yo prefiero entenderla como el encuentro con los otros, que a veces implica conflicto, y eso está bien, pero otras también esperanza, solidaridad, apoyo mutuo, ayuda. Creo que ese encuentro es lo único que puede darnos una oportunidad para cambiar las cosas de verdad. Sé que esto no es decir mucho porque pasar tiempo con los demás o implicarnos en colectivos, sindicatos, etc. no depende siempre de nosotros (muchas veces tenemos bastante con trabajo, cuidados etc), pero creo que es por ahí por donde va el camino a seguir.



Fraguas Revive

La okupación rural vence su primera batalla, provisionalmente, al derribo del pueblo

Debido a un escrito emitido oficialmente por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Guadalajara el pasado 29 de abril, los repobladores de Fraguas conocieron que provisionalmente se paraliza el derribo del pueblo. Se trata de un cambio de criterio judicial que se ha conseguido por el esfuerzo humano y la batalla jurídica de la que llevan años defendiéndose sus pobladores, y que paraliza con carácter provisional la ejecución de la sentencia de demolición del pueblo.

Un proyecto de ocho años de vida

Para quien no conozca la trayectoria de este proyecto comunitario de Fraguas, esta iniciativa de okupación rural echaba a andar en el año 2013 en una pequeña pedanía abandonada en la Sierra Norte de la provincia de Guadalajara. Este pueblo, que data del siglo XII, fue desalojado forzosamente durante la dictadura franquista en 1968 para el monocultivo de pino y su posterior venta a la industria maderera. Un grupo de jóvenes decidieron la pasada década reconstruir algunas viviendas que quedaron medio en pie, después de que militares españoles utilizaran la zona como campo de prácticas de tiro y explosivos en los años 90. Su proyecto es real y han conseguido sus objetivos iniciales, ya que consiguieron la reconstrucción de varias casas del pueblo, pero también han experimentando un gran nivel de autosuficiencia colectiva en la convivencia y la autogestión de recursos naturales. Cuentan con una huerta y un invernadero construido con sus propias manos, un pequeño gallinero al aire libre, abejas en un par de decenas de colmenas, y como autoabastecimiento energético cuentan con una treintena de paneles solares fotovoltaicos.

Tras haber sido denunciados por la Fiscalía y la Junta de Castilla-La Mancha en 2015 por la vía penal, declararon en el juzgado sobre su proyecto comunitario de cuidado y repoblación natural del entorno. A lo largo del año 2018 fueron juzgados y condenados finalmente a los delitos de usurpación de monte público, y contra la ordenación del territorio. Un proceso judicial que en los términos jurídicos impuestos es un rechazo institucional absoluto a cualquier alternativa de recuperación de pueblos abandonados, y menos bajo un paradigma de autoges-

ción económica y autonomía social. Les solicitan la entrada en prisión por un año y nueve meses, ascendiendo a dos años y tres meses para cada uno en caso de no pagar la responsabilidad civil impuesta, es decir, costear la demolición de lo reconstruido en el pueblo, valorado en un informe completamente inflado en la cifra total de 34 mil€.

Otra vuelta de tuerca a la represión y por la pervivencia de Fraguas

Desde el 2019 han estado en resistencia bajo el continuado riesgo de desalojo y demolición según lo indicado en la sentencia, sin embargo, la pandemia ha retrasado la ejecución de la misma. Durante este tiempo ganado ha intervenido el CSIC a raíz de los estudios que los propios repobladores han realizado del pueblo en torno a la recuperación de la memoria histórica y rural. Se advierte que debe llevarse a cabo una investigación arqueológica independiente que determine el valor histórico del antiguo núcleo de población. Probablemente haya bienes susceptibles de ser considerados patrimonio cultural, lo cual podría cambiar el curso de los acontecimientos actuales, o al menos abrir una nueva vía para seguir luchando por la pervivencia de Fraguas.

Sin embargo, los pobladores actuales toman con mucha cautela esta comunicación judicial. Si bien por un lado es motivo de alegría entre tantas notificaciones anteriores que les han llevado a la situación penal actual, este informe no asegura que no se acabe ejecutando un desalojo preventivo para realizar las investigaciones arqueológicas. También no debe olvidarse que las condenas de cárcel de los seis encausados siguen estando activadas. Además, durante este tiempo las identificaciones de algunos pobladores temporales o solidarios, han derivado en nuevos procesos sancionadores administrativos; e incluso el Juzgado de Guadalajara no descarta la imputación de nuevos delitos penales. La institución cuenta con muchos recursos, herramientas y coacciones a su alcance, retorciendo sus propias legislaciones y aplicándolas siempre en favor de sus intereses y objetivos.



Una red de iniciativas rurales por la autonomía y la memoria social

Sus actuales pobladores animan a conocer el pueblo, acudir y participar de las actividades diarias, descubrir su entorno patrimonial y cultural; acercarse a la realidad de la ruralidad que resiste. El modelo rural comunitario es un desafío a las dinámicas de la explotación capitalista, y actualmente el proyecto de Fraguas cumple ocho años de vida. Junto a la iniciativa de este pueblo, hay otros cuatro proyectos colectivos más en la zona norte de Guadalajara, que se reúnen en asamblea mensualmente para poner en común experiencias y acudir a uno de los pueblos implicados para realizar labores de trabajo juntas.

La defensa del territorio es también una defensa de la memoria de los pueblos, en unos tiempos en que todo queda diluido en la superficialidad de las necesidades que marca el mercado, es necesario apoyar de todo corazón esta clase de proyectos de sostenibilidad rural. Cuando se está en Fraguas el tiempo pasa, y no importa en absoluto, se trabaja en colectivo, la productividad no es una dictadura que marca sus ritmos. La autonomía personal y colectiva toma otro sentido, se resignifica el trabajo directamente relacionado con la propia supervivencia común, y no con echarle horas para conseguir euros que intercambiar por cosas mediante el consumo. Fuera de todo idealismo, la realidad es que la vida se reposa y toma otro nivel necesario para escuchar a nuestras compañeras y al propio entorno natural. Se vuelve más salvaje lo humano, se torna necesario lo natural.

[Novela] Hotel Madrid, historia triste

Autora: Rocío Lanchares Bardají. Editorial: Lengua de Trapo. Madrid, mayo 2021. 176 pg

«*Nuestro Asalto a la Bastilla es una terapia colectiva*». Así comienza la primera novela de Rocío Lanchares Bardají que narra, en primera persona y a través de tres misterios, la sucesión de eventos en los que participó la protagonista de esta obra desde mayo de 2011, en la Acampada Sol de Madrid, hasta la manifestación feminista del 8M en 2019.

Con un ritmo frenético y mucho humor, la autora aprovecha las vivencias de su protagonista para compartir sus reflexiones sobre si existió un concepto monolítico del 15M, qué significó la ocupación del denostado Hotel Madrid o qué papel jugó la fuerte represión policial en la desaparición de las asambleas de este movimiento. También nos desvela lo determinante de las relaciones interpersonales en el pulso colectivo porque «no nos cansamos de repetirlo» *lo personal es político y viceversa*.

Desde una perspectiva muy novedosa, Lanchares expone una cara oculta del quincemayismo en la que las asambleas se llenaron con personas que habitan los márgenes de la sociedad y que desafiaron tanto la estética como la ética ciudadanista y burguesa de otros sectores. Es la versión "walker" – un concepto teórico que desarrolla a lo largo del libro – de los acontecimientos en la que el afecto fue motor de las acciones.

La sucesión de anécdotas nos devolverá a la Plaza de Sol a darnos un baño de masas, al Hotel Madrid de la calle Carretas, despojado de sus venas de cobre y al mítico local Vaciador 34 de Carabanchel, con su ritmo techno y su eterna escasez de colchones. Este ejercicio de memoria sentimental intenta respetar la nostalgia ajena pero, al mismo tiempo, huye de ella en su exposición, ofreciendo una perspectiva descarnada de algunos hechos con brutal sinceridad.

En la novela la autora también aqueja que «*Nosotras ponemos el acontecimiento. Ya otros se hacen cargo de la idea*». Y es que en esta lucha por "el relato", la versión oficial o *youtuber* del 15M ha ignorado e, incluso, repudiado las experiencias de quienes pusieron el culo sobre el asfalto, el cuerpo bajo la porra o la mano en la palanca del metro.

Salvando lo blancoCISHetero que tiene Kropotkin hay que reconocerle que en *Palabras de un rebelde* (1885) ya identificaba este mismo fenómeno al decir que «*podrá también suceder que escuchando a los sabios y a los prudentes se apresure en calificar de locos a los decididos y en asegurar que los locos, "las cabezas trastornadas van a comprometerlo todo"... una propaganda teórica de la Revolución se traducirá en actos mucho antes que los teóricos hayan indicado que ha llegado la hora de poner las ideas en ejecución; sin embargo, los pretendidos teóricos se disgustan con los locos, los excomulgan, los anatematizan*».

Hotel Madrid, historia triste nos recuerda la importancia de la acción, del cariño y de la imaginación en la creación y preservación de proyectos autogestionarios, nos cuenta que los procesos de transformación no son de nadie y son para todes; pero también nos advierte del poder de la represión y de la transmisibilidad del desánimo como cortafuegos de la esperanza.



[Serie documental] Altsasu

Director: Asier Urbieto. 2020. Drama antirrepresivo, biografía. 4 episodios

Esta mini serie grabada en euskera se centra en la historia basada en el caso judicial de Altsasu. Fue emitida en EITB (la televisión pública vasca) el año pasado en cuatro episodios de unos 50 minutos de duración cada uno de ellos.

Para situar los acontecimientos, en la madrugada del 15 de octubre de 2016, en un bar de Altsasu, un pueblo de la parte navarra de Euskal Herria, una pelea implicó a varios jóvenes de la localidad y dos agentes de la Guardia Civil –fuera de servicio– y sus parejas. El caso llegó a juicio en la Audiencia Nacional, donde el fiscal describió los hechos como un ataque terrorista y pidió penas de entre 12 a 62 años de prisión para los ocho acusados. En la sentencia, la jueza rechazó los cargos de terrorismo, pero condenó a los jóvenes con sentencias de entre 2 a 13 años de cárcel por agresión tumultuaria.

Esta ficción social ha tenido la colaboración de los propios familiares de los encausados para reconstruir los hechos, habiéndose querido también contactar con los guardias civiles implicados y rechazando cualquier participación en la misma. Con su estreno llegó la criminalización por parte de los medios de comunicación de la caverna mediática y partidos políticos de la derecha, que tacharon la serie de falta de neutralidad por reflejar a los guardias civiles de borrachos y violentos.

La narración evidencia el entramado político y judicial del Estado español que siguió a los hechos de una simple pelea de bar en Altsasu, y que llevó a ocho jóvenes a juicio y condenas desproporcionadas, algunos de ellos en prisión preventiva largo

periodo de tiempo, y a la criminalización de todo un pueblo tachado de terrorista. Al más puro estilo de la no tan antigua Inquisición española, todos sus habitantes fueron señalados, lo que condujo a una estratégica y desbordante solidaridad articulada en la localidad, en Euskal Herria y gran parte del resto del Estado español, adquiriendo incluso dimensiones internacionales. Muestra la parte más íntima y personal narrada en ficción sobre las vidas de los protagonistas represaliados y sus familias, los distintos códigos diferenciadores entre ellas que consiguen superar para alzarse como una voz liberadora. También muestra los sueños truncados, y el impacto sobre sus biografías personales.

La serie pone el foco sobre los aspectos más oscuros de todo el proceso, incluyendo irregularidades que suponían graves vulneraciones del derecho de defensa: las malas prácticas en las ruedas de reconocimiento de los jóvenes; el hecho que la causa pasara de los juzgados de Pamplona, donde debería haber sido juzgada, a un tribunal excepcional como es la Audiencia Nacional; el rechazo de pruebas de gran valor como algunos vídeos grabados durante el incidente; la presentación de declaraciones escritas falsas o la condena a un joven que no estaba en el lugar de los hechos. Eso, sin olvidar que la magistrada Concepción Espejel formó parte del tribunal pese a haber sido recusada por las defensas por estar casada con un coronel de la Guardia Civil, cuerpo que investigó el caso, y haber sido condecorada por el propio Instituto Armado.

[Ensayo] Arqueología de la violencia. La guerra en las sociedades primitivas

Autor: Pierre Clastres. Editorial: Enclave ediciones. Madrid, 2021. 148 páginas

Arqueología de la violencia. La guerra en las sociedades primitivas, fue publicado originalmente en la revista *Libre* nº1, (París, 1977) y sucesivamente incluido en el libro-recopilación de textos de Clastres *Investigaciones en antropología política* (Barcelona, Gedisa, 1987).

Una investigación antropológica que plantea una cuestión que va más allá de su ámbito específico: ¿cuál es el origen del poder del hombre sobre el hombre?, ¿de dónde procede el poder político? A finales de los años sesenta, Pierre Clastres desafía el etnocentrismo de la razón política occidental: ¿y si a las sociedades amerindias, acusadas por los colonizadores europeos de ser "sin fe, sin ley, ni rey" no le faltara de nada? ¿Y si formasen, más que sociedades "sin Estado", sociedades "contra el Estado"? Toda la obra de Clastres explorará las consecuencias de este cambio de perspectiva. ¿Qué análisis llevar a cabo de este pensamiento en aras de actualizarlo a una época en la que los movimientos de las poblaciones autóctonas nos imponen de pasar "del silencio al diálogo" y la crisis ambiental global presupone una transformación profunda de nuestro modo de habitar la tierra? ¿Es posible plantear hoy un "devenir-indígena" del concepto de política frente a las derivas contemporáneas del Estado-nación?

En el libro, junto al potente texto de Clastres encontraremos un prefacio (*La libertad salvaje de Pierre Clastres*, de Roberto Marchionatti, publicado en la revista *Volontà*, 1986), y un posfacio (*La paradoja de la guerra: Pierre Clastres en perspectiva anarquista*, de Augusto Gayubas, ampliado y revisado respecto a su original publicación en la revista *Erosión*, nº5, año III, 2015), con la intención de brindar a todos pequeñas herramientas y ampliación de un campo de gran interés para el pensamiento político-filosófico contemporáneo.

Las sociedades indígenas no son, en el análisis original e innovador de Pierre Clastres, organismos que ignoran el poder del Estado: sociedades de la multiplicidad y la diversidad, no quieren ceder a la lógica de la unidad y defienden la libertad a toda costa. La ecuación hombre-guerrero, presente en todos los aspectos de la vida social, atañe a toda la cultura, porque a través de la guerra los grupos que componen la sociedad primitiva se oponen al poder autoritario del Estado. En este ensayo de alto nivel científico el autor analiza el comportamiento bélico de etnias hoy casi desaparecidas, sugiriendo una imagen de la sociedad primitiva como «sociedad para la guerra», que es a la vez «sociedad contra el guerrero».

Los textos y el análisis antropológico sobre el terreno de Clastres demuestran que en las sociedades primitivas el poder pertenece a todo el grupo y puede ser ejercido solamente negando todas sus formas exteriores; el poder político habita en la totalidad del cuerpo social, organizado según principios que impiden la emergencia de cualquier polo de concentración.

[Documental] Queercore: How to punk a Revolution

Dirigido por Yony Leyser. 2017. 1:23 min.

«Are you a boy / or are you a girl / in your bleach blonde hair» (Eres un chico o una chica con tu pelo rubio decolorado) cantaba Jayne County en 1977.

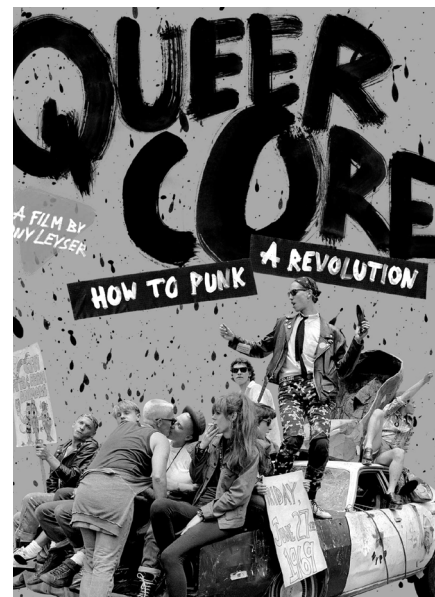
Bruce LaBruce, conocido como el pornógrafo del punk, tenía 18 años cuando llegó a Toronto (Canadá) en 1982. Pronto se dio cuenta de que la ortodoxia gay de los grupos de la ciudad constreñía sus ansias de una autodeterminación sexual fluida y flexible. La escena punk rock, por su parte, también imponía estrictos roles de género que le empujaban a la marginación. En 1981 la cantante y directora G. B. Jones junto con Caroline Azar y Candy Parker habían formado la banda *Fifth Column* (Quinta Columna). El nombre se refiere a la estrategia franquista del golpe de 1936. Se trataba de un grupo de punk formado sólo por mujeres que LaBruce define como "feministas a su manera". Bruce y G.B., en respuesta al creciente aburguesamiento de la comunidad gay, crearon el fanzine conocido como J.D.'s de contenido sexual, político y artístico y dedicado a la agitación y provocación con titulares como «Hitler tenía razón: los homosexuales son los enemigos del Estado».

El documental *Queercore* narra la historia de estos creadores y de grupos musicales y performáticos canadienses cuya producción artística encontró inspiración en el situacionismo, especialmente las obras *La revolución de la vida cotidiana* de Raoul Vaneigem y *La sociedad del espectáculo* de Guy Debord. La cinta sostiene la teoría de que lo que hoy conocemos como Movimiento Queer nació entre las páginas de ese fanzine casero, cuyo contenido correría como la pólvora de las calles de Toronto inspirando a otros como, por ejemplo, los creadores de *Homocore* en San Francisco (Estados Unidos) y la banda *Pansy Division*.

La revista *Homocore* serviría de inspiración al propio Kurt Cobain de *Nirvana* para componer su tema *God is Gay* y, al mismo tiempo, el tema *Smells like teen spirit* fue versionado por *Pansy Division* en *Smells like queer spirit*: «Against all odds, we appear / Grew up brainwashed / But turned out queer / Bunsplitters, rugmunchers too / We screw just how we want to screw» (Contra todo pronóstico, aparecimos / Crecimos con un lavado de cerebro / Pero resultó extraño / rompebollos, muerdealfombras también / Nos jodemos como queremos joder).

Queercore nos permite recorrer las décadas de 1980 y 1990 y observar la evolución de la música y las revistas políticas en defensa de la liberación sexual y el feminismo. Veinte años después, sus protagonistas nos animan a empujar los límites de la normalidad siempre un poquito más.

El documental se puede ver entero en www.todoporhacer.org/queercore



[Informe] Vulneraciones de derechos humanos en la Frontera Sur: Canarias y Melilla

Autoría: Daniela Lo Coco, Sani Ladan, Diana Cardona y Andrés G. Berrio. Entidades: Irídia y Coordinadora de Barrios. Financiado por Intermón Oxfam. Diseño: Valentina Lazo. Enero 2021. 102 páginas

Este informe sobre vulneraciones de derechos en la frontera sur es fruto de una investigación hecha a distancia y en terreno por un equipo multidisciplinar de cinco personas (un experto en relaciones internacionales, dos politólogas, una comunicadora y un abogado) que han analizado el contexto migratorio en el marco de la pandemia de Covid-19 y la situación concreta que se vive en la Frontera Sur. El objetivo es trasladar las denuncias y exigir la intervención de los organismos internacionales competentes en la materia así como entregárselo al Gobierno Español, al Ministerio Fiscal, al Defensor del Pueblo así como a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.

Las personas llegadas por vía terrestre a los enclaves de Ceuta y Melilla durante 2020 (1.755 llegadas) han descendido más del 70% en comparación con el mismo período de 2019 (6.346 llegadas), pero el total de víctimas mortales de migrantes que han intentado alcanzar las costas españolas ha ascendido hasta 2.170 personas. La ruta canaria se ha confirmado como la más mortífera de todas, y ha dejado un total de 45 naufragios y 1.851 víctimas mortales. Esta cifra corresponde al 85% del total de víctimas y, según los datos que ofrece el colectivo, esta ruta presenta una tasa de mortalidad del 32,1%.

Las personas rescatadas en el mar, tras haber superado una travesía de entre 2 y 8 días potencialmente traumática, reciben una actuación policial en vez de una atención humanitaria: quedan detenidas por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y en privación de libertad. Dicho proceso de detención se ha llevado a cabo en Gran

Canaria en diferentes espacios en los últimos años, normalmente en calabozos de dependencias policiales que no estaban preparadas para esta función. En la segunda mitad del año 2020 se han utilizado dos espacios como centros de detención para este procedimiento por parte del CNP: el muelle de Arguineguín y el CATE de Barranco Seco.

Un contexto de emergencia sanitaria como el actual producido por la Covid-19 no exime que se respeten los derechos fundamentales de las personas en el marco de una detención. No obstante, el Ministerio del Interior y el CNP han generado situaciones en las que se han flexibilizado, sin amparo legal, tanto las condiciones como los tiempos de la detención. Como anuncia Irídia, las condiciones de detención que se produjeron en el muelle de Arguineguín durante 4 meses (hacinamiento, estancia a la intemperie, condiciones higiénicas y sanitarias, así como la deficiente alimentación y la falta de espacios para el descanso) podrían considerarse contrarias al Art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al constituir un trato cruel, inhumano o degradante.

Una detención no puede superar el plazo de 72 horas. Sin embargo, diferentes organizaciones, cargos políticos locales e incluso el Juez de vigilancia del CIE de Las Palmas aseguran que en el muelle de Arguineguín se produjeron irregularidades en este sentido. Se habrían detectado casos de personas que han superado los 10 e incluso los 20 días detenidas, por lo que convierte el muelle en un centro de detención.

Por otro lado, también se han producido diferentes irregularidades en el

acceso a la información y a la asistencia letrada en Arguineguín. Muchas de las personas migrantes que habían llegado hasta el 11 de noviembre de 2020 no habían tenido entrevista con sus abogados/as debido a la falta de condiciones en el muelle: los abogados eran citados en comisaría, a kilómetros de donde se encontraba la persona detenida ya que las instalaciones del muelle no cumplían la normativa referente a la Covid-19.

Por lo que se refiere al CATE de Barranco Seco, donde trasladaron a todas las personas bloqueadas en Arguineguín, no se respetan los derechos de las personas detenidas, tanto en las condiciones de alojamiento en tiendas de campaña como en las medidas higiénicas y sanitarias. Asimismo, se han detectado situaciones de personas, entre las cuales menores, que han superado las 72 horas de detención y no se garantiza una asistencia letrada individualizada en un espacio adecuado.

En Melilla se han producido decenas de devoluciones sumarias y también ha aumentado la práctica de las devoluciones exprés, que supone el retorno de las personas hacia Marruecos en menos de 72 horas. Por otro lado, el nuevo sistema de vallado fronterizo aumenta en muchos puntos la altura de la valla hasta los 10 metros y hay nuevas estructuras que pueden suponer un aumento en la lesividad durante los saltos y cruces.

La situación provocada por la pandemia ha sido aprovechada para intensificar y legitimar la política de bloqueo de personas migrantes en Melilla y en otros puntos de la Unión Europea.

Puedes descargar el informe en:
www.todoporhacer.org/informe-vulneraciones-derechos-frontera-sur/

Número 125

Tirada: 1.500 ejemplares

Mail: todoporhacer@riseup.net

Twitter: @todoporhacer1

Más información:

www.todoporhacer.org

Apoyo Solidario:

ES16 0049 6704 55 2190128999

Durante los últimos diez años puede que te hayas encontrado con el periódico mensual *Todo por Hacer*. Esta publicación nace en 2011 con la ilusión por sacar adelante un proyecto autogestionado que contribuya a visibilizar nuestras posturas anarquistas en papel y de manera gratuita, dos características esenciales de este proyecto que, aunque conllevan sus dificultades, tienen ventajas fundamentales como son una cierta perdurabilidad, la difusión “mano a mano”, la presencia física en la calle, etc.

Alejándonos de la inmediatez de los medios digitales, tratamos de dar prioridad al análisis sobre la novedad, dar difusión a noticias que vayan más allá de un mero titular, que contextualicen y que mantengan su vigor aun con el paso de las semanas.

Nuestra opinión pretende situarse al margen de la ideología del sistema. Contaminadas/os por ella, insistimos en superarla y derrumbarla, en derrumbar al sistema mismo y construir entre todos y todas una sociedad donde la autoorganización, la solidaridad y el apoyo mutuo sean los postulados esenciales para la vida en libertad.

El periódico que presentamos aspira a ser un mínimo ejemplo de la capacidad que todas tenemos para llevar a cabo nuestros proyectos sólo con esfuerzo y motivación. Y toda ayuda es bienvenida, ya sea colaborando con la financiación, con la distribución en la calle o en redes sociales. Para cualquier sugerencia, crítica, ayuda, etc. no dudes en escribirnos.



A mediados de mayo, cientos de titulares coparon los medios de comunicación alertando de la llegada masiva a Ceuta de personas procedentes de Marruecos. Titulares de alarma, imágenes de militarización total de la zona, devoluciones en caliente... Que incluso dieron paso, unos días después, a (poco numerosas) movilizaciones racistas en varias comunidades autónomas, contra el traslado de 10 ó 20 chavales/as a su territorio.

En las mismas fechas, circularon por redes imágenes de una "invasión" muy distinta: el aeropuerto de Palma de Mallorca colapsado ante la llegada masiva de turistas tras el fin del estado de alarma y de las restricciones de viaje en algunos países europeos.

Ambas imágenes tienen un origen similar: un gobierno dejando salir a la gente de su territorio. El recibimiento que se encuentran un@s y otr@s, el tratamiento mediático, y las consecuencias para ell@s, son bien distintos.

